

Órgano:

Sede:

Sección:

Fecha: //

Nº de Recurso:

Tipo de Resolución: **Auto**

Pamplona/Iruña 31011 NIG: 3120143220210001920

Teléfono: 848.42.41.06 - FAX 848.42.41.56 Email.: EMAIL000 TX025 Procedimiento origen: Procedimiento sumario ordinario 0000653/2021 - 0 Órgano origen: Jdo. Instrucción Nº 2 de Pamplona/Iruña

Puede relacionarse de forma telemática con esta Administración a través de la Sede Judicial Electrónica de Navarra WWW000

AUTO Nº 272/2024

Ilmo. Sr. Presidente D. JOSÉ FRANCISCO COBO SÁENZ (Ponente) Magistradas Ilmas. Sras. D.ª. MARÍA AURORA RUIZ FERREIRO D.ª. ANA MONSERRAT LLORCA BLANCO

En Pamplona/Iruña[N1] a 24 de junio de 2024.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra, integrada por las Ilmas. Sras. Magistrados y el Ilmo. Sr. Magistrado, al margen expresados, ha visto en grado de apelación los **Rollos Penales de Sala números 78 y 79/2024**, dimanante de Procedimiento Sumario Ordinario, número 653/2021, procedente del Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona/Iruña, en el que se sustancian los recursos de apelación, interpuestos:

(i) El **Ministerio Fiscal** (ii) La acusación popular ejercitada por el **Partido Político, Unión Del Pueblo Navarro**, procesalmente representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Jaime Ubillos Minondo, asistido por el Letrado Sr. Guillermo Chaverri Reparaz, (iii) La acusación popular ejercitada por el **Partido Político, Partido Popular**, procesalmente representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Javier Araiz Rodríguez, asistido por el Letrado Sr. Juan Pablo Valencia, frente a los Auto dictados el pasado 11 de diciembre.

Estando apelados:

(i) **El Sr. Arsenio**, procesalmente representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Camino Royo Burgos, jurídicamente asistido por la Letrada Sra. Miren Itziar Charterina Solaun.

(ii) **Las Sras. Edurne, Marta, e Cándida**, procesalmente representadas por el Procurador de los Tribunales Sr. Pablo Epalza Ruiz De Alda, jurídicamente asistidas por el Letrado Sr. Martin Zudaire Polo.

(iii) **El Sr. Estanislao**, procesalmente representado por la Procuradora de los Tribunales Sra. Andrea Leache Lopez, jurídicamente asistido por el Letrado Sr. Fernando Martínez Chocarro.

(iv) **La Sra. María Cristina**, procesalmente representada por la Procuradora de los Tribunales Sra. Elena Maturen Miguel, jurídicamente asistidas por la Letrada Sra. Jartum Lara.

(v) **El Sr. Arturo**, procesalmente representado por el Procurador de los Tribunales Sr. Eduardo de Pablo Murillo jurídicamente asistido por el Letrado Sr. Juan Manuel Alonso.

Ha sido ponente el **Ilustrísimo Señor Magistrado Presidente de la Sección Don José Francisco Cobo Sáenz**.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona, en el trámite propio de Procedimiento Sumario Ordinario, número 653/2021, (a) Mediante Auto de 11 de diciembre pasado, dispuso:

"...ESTIMAR el recurso de reforma contra el Auto de fecha 24 de agosto de 2023, dejando el mismo sin efecto."

Frente a la expresada resolución, se interpuso recurso de apelación, (i) Por el Ministerio Fiscal, para interesar *"...que por parte de la Sala SE*

*ESTIME EL RECURSO DE APELACION, SE REVOQUE EL AUTO RECURRIDO Y SE
DECLARE QUE LA PRÓRROGA DE 24 DE AGOSTO DE 2023 ESTÁ PLENAMENTE*

VIGENTE.” (ii) Por el Partido Político, Unión Del Pueblo Navarro, en solicitud dirigida a la Sala a fin de que “... dicte Auto estimando el Recurso de Apelación y anule el auto de fecha 11 de diciembre de 2023 y confirme el auto de fecha 24 de agosto de 2023 de prórroga de la instrucción.”.

(iii) Por el Partido Político, Partido Popular, solicitando de la Sala que “... dicte auto mediante el que, estimando íntegramente el presente recurso, revoque la resolución recurrida y declare conforme a Derecho las prórrogas de la instrucción acordadas en autos, así como la devolución del proceso al Juez instructor para la práctica de las diligencias que quedan pendientes.”

Los expresados recursos fueron impugnados por las respectivas representaciones procesales, del Sr. Arsenio; de las Sras. Edurne, Marta, e Cándida; del Sr. Estanislao; de la Sra. María Cristina y del Sr. Sr. Arturo para solicitar en todos los expresados casos la íntegra confirmación de la resolución impugnada.

El recurso de apelación frente al expresado Auto ha dado lugar al Rollo Penal de Sala, 79/2024.

(b) Mediante Auto igualmente datado el 11 de diciembre pasado se dispuso:

“...Se acuerda declarar la falta de validez de las diligencias acordadas después del 21 de enero de 2022, dejándolas sin efecto.

Se resuelve el fin de la instrucción en los términos que se indicarán en resolución aparte.”.

Frente a la expresada resolución, se interpuso recurso de apelación, (i) Por el Ministerio Fiscal, para interesar que por parte de la Sala “... se estime LA REVOCACIÓN DEL AUTO RECURRIDO, ya que la primera de las prórrogas, la del día 18 de febrero de 2022 fue acordada en plazo, antes de la expiración del plazo de investigación de 12 meses previsto en el artículo 324 LECR.

De este modo, y siendo todas las prórrogas posteriores acordadas en plazo, todas las diligencias que han sido acordadas y practicadas son válidas, debiéndose por ello practicar las declaraciones testificales y de investigado que estaban señaladas para los días 19 y 20 de diciembre; continuando con la investigación sigue viva y manteniendo la prórroga acordada el día 24 de agosto de 2023.”.

(ii) Por el Partido Político, Unión Del Pueblo Navarro, en solicitud dirigida a la Sala a fin de que -se dicte- “.... Auto estimando el Recurso de Apelación y anule el auto de fecha 11 de diciembre de 2023 y acuerde la validez de las diligencias acordadas con posterioridad al 21 de enero de 2022 y se vuelvan a señalar las declaraciones de los investigados y los testigos previstas en la Providencia de fecha 28 de abril de 2023.” (iii) Por el Partido Político, Partido Popular, solicitando de la Sala que “... dicte auto mediante el que, estimando íntegramente el presente recurso, revoque la resolución recurrida y declare conforme a Derecho las prórrogas de la instrucción acordadas en autos, así como la devolución del procesal Juez instructor para la práctica de las diligencias que quedan pendientes.”

Los expresados recursos fueron impugnados por las respectivas representaciones procesales, del Sr. Arsenio; de las Sras. Edurne, Marta, e Cándida; del Sr. Estanislao; de la Sra. María Cristina y del Sr. Sr. Arturo para solicitar en todos los expresados casos la íntegra confirmación de la resolución impugnada.

(c) Si bien no es objeto específico de recurso devolutivo, es preciso señalar ya “ab initio”, que mediante Auto igualmente datado el 11 de diciembre pasado se dispuso:

“... Se declara terminado el presente Procedimiento sumario ordinario nº 0000653/2021.

Remítanse los autos y las piezas de convicción a la Audiencia Provincial de Navarra.

Al hacer la remisión cuidará el Sr./Sra. Letrado de la Administración de Justicia de este Órgano Judicial, de expresar los recursos de apelación en un efecto que haya pendientes, así como los cambios de domicilio notificados por los testigos y partes”

La expresada remisión a nuestra homónima Sección 1ª de este Tribunal Provincial no ha sido materializada, por cuanto frente al Auto que la acuerda, en definitiva, se interpuso recurso de reforma por el Ministerio Fiscal que ha sido admitido a trámite, por estimar, en base a los argumentos en que sustentó su pretensión revocatoria de los Autos anteriormente reseñados -precedentes apartados (a) y (b) que reprodujo-

“[.../...] que EL SUMARIO NO PUEDE CONCLUIR, ya que están pendientes de practicarse diligencias de investigación en la presente causa que impiden tal decisión. Y ello porque el plazo de instrucción no ha terminado:

La investigación se inició el día 21 de enero de 2021, fecha a la que hay que descontar los 48 días en los que la misma estuvo sin órgano judicial competente (desde el día 29 de enero que pierde la competencia objetiva

el Tribunal Supremo hasta la incoación del procedimiento en Pamplona); las prórrogas se acordaron en plazo (los días 18 de febrero de 2022, 3 de agosto de 2022, 28 de febrero de 2023 y 24 de agosto de 2023) y por ello las diligencias han sido todas acordadas en plazo y practicadas asimismo en plazo; debiendo continuarse con la investigación y las declaraciones testimoniales y de investigado que habían sido señaladas para los días 19 y 20 de diciembre de 2023.

(.../...).

SEGUNDO.- Enviados los autos a este Tribunal y turnados a la presente Sección, se formaron los Rollos Penales de Sala 78 y 79/2024, designándose Ponente al Ilmo. Sr. Magistrado Presidente de la Sección D. José Francisco Cobo Sáenz, conforme al turno establecido.

Comparecidas las partes ante este tribunal, se procedió a señalar la vista contemplada en el artículo 230 LECrim, que en definitiva fue celebrada el pasado día 21 de mayo, con el resultado que consta en el soporte electrónico extendido al efecto.

TERCERO.- En la tramitación del presente recurso, se han observado, las prescripciones legales.

RAZONAMIENTOS JURÍDICOS

PRIMERO.- Planteamiento introductorio.

Para encuadrar adecuadamente los términos del debate en la presente alzada, en el contexto que se configura por razón del contenido de los Autos objeto del recurso no devolutivo y también el que reseñamos en el apartado (c) del precedente Antecedente de Hecho Primero, se hace preciso realizar alguna reflexión y constatación relativa a la naturaleza jurídico-procesal y las consecuencias vinculadas a su aplicación en las concretas circunstancias del caso de los plazos de investigación.

(i) Entre el haz de garantías que conforman el derecho a un proceso justo y equitativo ex artículos 6 CEDH 47 CDFUE y 24 CE se encuentran aquellas que disciplinan el tiempo de producción de las diligencias de investigación, el modo de obtención de las fuentes de prueba y de proposición y práctica de los medios probatorios.

La STS 836/2021, de 3 de noviembre y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en reiterados pronunciamientos -vid. por todas, STEDH, caso Niculescu contra Rumanía, de 25 de junio de 2013 - recuerda la decisiva importancia que para el derecho a un proceso justo y equitativo adquiere la pronta garantía de los derechos a la no autoincriminación y a la asistencia letrada y el riesgo grave de inequidad que puede derivarse de su arbitraria lesión.

En la misma línea el Tribunal Constitucional en su STC 135/1989 incide en que el haz de garantías defensivas que se derivan de la Constitución comporta interpretar el artículo 118 LECrim en el sentido que prohíbe, retrasar de manera injustificada la constitución del estatus de imputación en relación con la persona que pueda aparecer como responsable del hecho justiciable.

En el mismo sentido, la STS 52/2022, de 21 de enero en relación al art. 324 LECrim, señala: << La finalidad de estos plazos es que ningún ciudadano quede cuestionado en su presunción de inocencia y sometido a proceso de investigación indefinido, inagotable y temporalmente irrazonable para una sociedad democrática.>>

La sentencia, 836/2021 -luego reiterada entre otras muchas por las 52/2022, de 21 de enero; 605/22, de 16 de junio; 738/2022, de 17 de julio; 983/2022, de 21 de diciembre; 361/2023, de 17 de mayo; 872/2023, de 23 de noviembre y 168/2024 de 23 de febrero-, describe la finalidad y efectos o consecuencias de la normativa recogida en la nueva redacción del art. 324 LECrim:

<<La reforma operada por la Ley 41/2015 introdujo un elemento de temporalidad en el desarrollo de la fase previa -mantenido en la reforma operada por la Ley 2/2020, de 27 de julio - partiendo de un plazo general prorrogable mediante resoluciones motivadas que justifiquen la necesidad o no de prolongar la instrucción para la obtención de los fines propios de dicha fase. Dicha temporalización incorporó -e incorpora en la regulación vigente- consecuencias relevantes, algunas de nítido alcance preclusivo, en los propios términos contemplados en el artículo 324.6º, texto de 2015, o en el vigente artículo 324.4, ambos, LECrim . La principal, la finalización de la fase previa y, con ella, la oportunidad de práctica de nuevas diligencias indagatorias.

La preclusión no puede modularse a salvo que restaran por practicarse o por recepcionarse diligencias ordenadas antes del transcurso de los plazos de duración establecidos, en cuyo caso la fase de instrucción permanecerá, a tales exclusivos efectos, abierta -cuestión colateral, y no relevante en este caso, pero no por ello intrascendente para el análisis general de la temporalidad de la fase previa, es la consecuencia que se puede derivar de la doctrina contenida en la sentencia de Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Gran Sala, de 5 de

junio de 2018, asunto C- 612/15, caso Kolev y otros, sobre inoponibilidad de fórmulas de crisis procesal derivadas del transcurso de plazos de tramitación en supuestos de procesos en los que se persiguen infracciones contra los intereses financieros de la Unión Europea]-. >>

Al hilo de la cita de la expresada sentencia del TJUE - Sentencia de 5 de junio de 2018 Asunto C612/15, ECLI EU:C:2018:392 y tomando en consideración que, en el presente caso, una de las financiaciones que se considera objeto de investigación, fue concedida por el Banco Europeo de Inversiones, cabe recordar que en el asunto Kolev se cuestionaba una disposición nacional que disponía el sobreseimiento del proceso penal, a instancia de la persona acusada, en caso de haber transcurrido más de dos años desde el inicio de la fase preliminar sin que el fiscal hubiera puesto fin a las diligencias de investigación.

El TJUE declaró que el artículo 325 TFUE, apartado 1 -proclama que “la Unión y los Estados miembros combatirán el fraude y toda actividad ilegal que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea mediante medidas adoptadas en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, que deberán tener un efecto disuasorio y ser capaces de ofrecer una protección eficaz en los estados miembros y en las instituciones, órganos y organismos de la Unión”-, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece un procedimiento de clausura del proceso penal como el contemplado, en la medida en que tal normativa se aplique en procesos incoados por fraude grave u otra actividad ilegal grave que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea en materia aduanera, y corresponderá al órgano jurisdiccional nacional dotar de plena eficacia al artículo 325 TFUE, apartado 1, inaplicando, en su caso, dicha normativa, y velando al mismo tiempo por garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas acusadas. En cualquier caso, no debe ordenarse el sobreseimiento del proceso penal por la única razón de que sería más favorable para las personas acusadas.

En todo caso, conviene recordar que, como señaló el Abogado General en los puntos 61 y ss. de las conclusiones, la causa del retraso era imputable a la obstrucción deliberada del acusado. La adopción por la República de Bulgaria de esa legislación era consecuencia de la voluntad de luchar contra los retrasos procesales que dieron lugar a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenase en reiteradas ocasiones a ese Estado miembro por inobservancia del plazo razonable; pero los hechos del asunto demostraban que de la normativa establecida se derivaba un riesgo sistemático de impunidad respecto a las infracciones que perjudican los intereses financieros de la Unión Y en su Fallo el Tribunal de Justicia (Gran Sala) declara:

<< 1 El artículo 325 TFUE, apartado 1, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional que establece un procedimiento de clausura del proceso penal como el regulado en los artículos 368 y 369 del Nakazatelno protsesualen kodeks (Código Procesal Penal), en la medida en que tal normativa se aplique en procesos incoados por fraude grave u otra actividad ilegal grave que afecte a los intereses financieros de la Unión Europea en materia aduanera. Corresponderá al órgano jurisdiccional nacional dotar de plena eficacia al artículo 325 TFUE, apartado 1, inaplicando, en su caso, dicha normativa y velando al mismo tiempo por garantizar el respeto de los derechos fundamentales de las personas acusadas.

2 El artículo 6, apartado 3, de la Directiva 2012/13/UE (LCEur 2012, 720) del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 2012, relativa al derecho a la información en los procesos penales, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que se comunique a la defensa información detallada sobre la acusación después de que se haya presentado el escrito de acusación ante el juez, pero antes de que este último comience a examinar el fondo de la acusación y de que se abran los debates ante él, o incluso con posterioridad a la apertura de esos debates pero antes de la fase de deliberación en el caso de que la información así comunicada sea objeto de modificaciones ulteriores, a condición de que el juez adopte todas las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos de defensa y la equidad del proceso.

El artículo 7, apartado 3, de esta Directiva debe interpretarse en el sentido de que corresponde al juez nacional asegurarse de que se ofrezca a la defensa una posibilidad efectiva de acceder a los materiales del expediente, acceso que puede tener lugar, en su caso, después de que se haya presentado el escrito de acusación ante el juez, pero antes de que este último comience a examinar el fondo de la acusación y de que se abran los debates ante él, o incluso con posterioridad a la apertura de esos debates pero antes de la fase de deliberación en el caso de que se hayan aportado a los autos nuevas pruebas en el transcurso del procedimiento, a condición de que el juez adopte todas las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos de defensa y la equidad del proceso.

3 El artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2013/48/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2013, sobre el derecho a la asistencia de letrado en los procesos penales y en los procedimientos relativos a la orden de detención europea, y sobre el derecho a que se informe a un tercero en el momento de la privación de libertad y a comunicarse con terceros y con autoridades consulares durante la privación de libertad, debe

interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que obliga al juez nacional a excluir al abogado designado por dos personas acusadas, en contra de la voluntad de estas, cuando exista contradicción entre los intereses de dichas personas, ni se opone tampoco a que el juez permita que esas personas designen un nuevo abogado o, en su caso, a que designe él mismo sendos abogados de oficio en sustitución del primer abogado.- (ii) En otro orden de consideraciones y sin perjuicio de la calificación del plazo de investigación como "término propio esencial" -vid. por todas la antes citada STS 2ª 168/2024 de 23 de febrero-, de modo que el tiempo de producción se convierte en condición normativa de adquisición, y en consecuencia, el transcurso del término o su prórroga extemporánea priva de título competencial al juez de instrucción para ordenar diligencias de investigación novedosas. Finalizada la fase de instrucción, el juez no puede seguir investigando el hecho punible practicando diligencias. De ahí que su traspaso deba considerarse, ya desde la regulación de 2015, causa de anulación y pérdida de eficacia de la diligencia instructora intempestiva, de conformidad a lo previsto en el artículo 242 LOPJ. Sanción procesal, la de anulación, que se ha incorporado expresamente a la regulación de la temporalidad de la fase previa en el hoy vigente artículo 324.3 LECrim - vid. STS 455/2021, de 27 de mayo.

Como se recuerda en la STS 2ª 176/2023 de 13 de marzo -los pasajes destacados son nuestros-,

<< No obstante, la invalidez de las diligencias tiene alguna excepción. Así, en la STS 605/2022, de 16 de junio, hemos declarado que **pueden practicarse fuera de plazo las diligencias de instrucción que se deriven inescindiblemente de otras diligencias ya admitidas dentro de plazo**. En la sentencia citada se había solicitado a un operador de Internet los datos de registro de una cuenta de correo, así como las IP de las conexiones registradas por esa cuenta y, a raíz de la contestación ofrecida por el operador, se acordó, ya rebasado el plazo de instrucción, la remisión de la dirección de IP asociada a uno de los correos para proceder a la identificación de su titular. Se argumentó que **no se trataba de una sucesión de diligencias de investigación funcionalmente diferenciadas sino de diligencias con una incuestionable conexión funcional**, en la medida en que para conocer lo que evidenció la segunda de las diligencias la primera diligencia operaba como indefectible presupuesto.>>

(iii) En cualquier caso, debe considerarse que el simple transcurso del plazo no produce el archivo de las actuaciones, en los términos utilizados por la norma originaria -vid. artículo 324.8 LECrim -, como una suerte de caducidad automática de la acción penal. Pero, precisamente por ello, y como prevenían los numerales 6 y 8 del artículo 324 LECrim, texto de 2015, y el hoy vigente artículo 324.4 LECrim, la terminación de la fase previa por expiración del plazo lo que impone al juez es la obligación de dictar la resolución que proceda al amparo de la valoración del material instructor incorporado hasta ese momento a las actuaciones. -vid. en este sentido SSTs 2ª 836/2021 de 3 de noviembre y 168/2024 de 23 de febrero- Como más adelante precisaremos, en una visión holística de los tres Autos que reseñamos al comienzo del presente fundamento dictados por el Juzgado instructor, la exclusiva razón que anima la declaración de conclusión del sumario, radica en la conclusión del plazo de investigación, sin haberse acordado temporáneamente las prórrogas solicitadas; lo que conduce al último extremo de este planteamiento introductorio.

(iv) En el caso de que, en términos hipotéticos, finalizado el plazo de instrucción se decida la prosecución del proceso por disponerse de otros datos indiciarios utilizables, resulta imprescindible destacar que la infracción del principio de adquisición por transcurso del término esencial no es un supuesto de ilicitud constitucional por vulneración de derechos fundamentales sustantivos. Por lo que no procede anudarle el efecto de inutilizabilidad absoluta tanto objetiva -con relación a cualquier decisión a adoptar en el proceso- como subjetiva -respecto a cualquier persona concernida por la violación de derechos- de la información así obtenida, previsto en el artículo 11 LOPJ.

Lejos de este escenario de nulidad absoluta por ilicitud constitucional, la intempestividad convierte a la diligencia, como genuina fuente de prueba, en irregular, debiéndose entender como tal la obtenida, propuesta o practicada con infracción de la normativa procesal que regula el procedimiento probatorio, pero sin afectación nuclear de derechos fundamentales -vid. SSTs 1328/2009, de 30 de diciembre, 115/2015, de 5 de marzo -.

La consecuencia más destacada es que la prohibición de utilización se convierte en relativa, circunscrita, por tanto, al momento y a los efectos fijados por la norma y sin efectos reflejos.

La intempestividad de las diligencias no contamina de ilicitud constitucional a las informaciones sumariales reportadas irregularmente al proceso. El vicio tempo-procesal de producción no reclama en este caso que dicha información quede definitivamente excluida de todo aprovechamiento posible, como acontece con la prueba constitucionalmente ilícita cuya exclusión resulta una exigencia para la protección de la integridad del proceso -vid. STC 97/2019 -.

El incumplimiento de la regla de prohibición de adquisición de información sumarial más allá del término establecido en la ley, además de neutralizar su aprovechamiento para fundar la inculpación, afectará al potencial valor probatorio anticipado o preconstituido de la diligencia intempestiva. Pero no impide, insistimos, que su contenido informativo, en el caso de que se considere que hay razones indiciarias suficientes, obtenidas

de diligencias regularmente practicadas, para proseguir el proceso inculpatario, pueda ser introducido en el acto del juicio como dato probatorio de la mano de otros medios de prueba propuestos por las partes

-vid. SSTC 303/93, 171/99, 259/2005, 216/2006, 197/2009 -.

SEGUNDO.-Las concretas circunstancias del caso.

(i) Según se reseña, en el Auto dictado por la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 1 de diciembre de 2020 –DE 2, Tomo I-, en cuya parte dispositiva se acuerda,

<<1º) Declarar la competencia de esta Sala para la instrucción y, en su caso, el enjuiciamiento con respecto al aforado, D. Arsenio.

2º) La apertura del procedimiento, designando Instructor, conforme al turno establecido, al Magistrado de esta Sala Excmo. Sr. D. Andres Palomo del Arco, a quien se le comunicara dicha designación a los efectos oportunos.>>

Verificando una “valoración muy provisional”, de los hechos que pudieran ser delictivos atribuibles a persona aforada, los mismos en síntesis se concretan y según la exposición del partido político querellante en que:

“... durante los años 2015 a 2017. en que el aforado fue Vicepresidente Primero del Gobierno de Navarra, Consejero de Desarrollo Económico y Presidente del Consejo de Administrador de la Sociedad de Desarrollo de Navarra S.L. (en adelante SODENA), procedió, en septiembre de 2015, a conceder a la entidad DAVALOR SALUD S.L. (en adelante DAVALOR) un préstamo por importe de 1.000.000 euros, sin respetar los procedimientos de control internos y los criterios analíticos de la Sociedad, siendo conocedor de que DAVALOR no reunía las condiciones previamente establecidas para su concesión y que se encontraba en situación de insolvencia, haciéndolo por el procedimiento de urgencia y sin recabar la autorización expresa del Parlamento de Navarra que exige la Ley Foral de la Hacienda Pública.

Asimismo, pese a ser conocedor de la falta de depósito de las cuentas anuales por parte de DAVALOR y de las deudas que la entidad mantenía con la Hacienda Tributaria de Navarra y con la Seguridad Social -determinantes estas de la efectiva denegación de subvenciones en los años 2016 y 2017-, el querellado, no solo no instó el vencimiento anticipado del anterior préstamo, sino que procedió a conceder cinco nuevos préstamos a DAVALOR por importe total de 2.600.000 euros. El primero, en diciembre de 2016, por importe de 400.000 euros; el segundo, en enero de 2017, por importe de 600.000 euros; y las tres últimas, concedidos los días 11 de abril, 26 de mayo y 31 de agosto de 2017, por importe de 200.000 euros cada uno de ellos.

La anterior imputación se sustentaría, según la querella presentada, en los siguientes hechos:

1.- En el año 2015, el administrador de DAVALOR (Sr. Arturo) contactó con SODENA para solicitar un aval de 4.000.000 euros. Los servicios técnicos de SODENA (entidad pública, participada por un socio único - la Corporación Pública Empresarial de Navarra- dependiente del Gobierno de Navarra), tras los estudios y comprobaciones oportunas, emitió en junio de 2015 un informe denominado «Análisis de inversión en DAVALOR SALUD S.L.» en el que se ponían de manifiesto graves debilidades financieras de la empresa.

Por tal motivo, el Consejo de Administración de SODENA, en la sesión del día 23 de junio de 2015, dada la situación crítica que amenazaba la propia supervivencia de la empresa, acordó rechazar el apoyo financiero solicitado, salvo que DAVALOR justificase disponer de 11.000.000 euros adicionales de inversores profesionales. Condición que nunca llegó a acreditar.

2.- En agosto de 2015, tras la constitución del nuevo Gobierno de Navarra, surgido tras las elecciones autonómicas de 24 de mayo de 2015, el Sr. Arturo, a través de la intermediación del Sr. Estanislao (como consultor de empresas), contactó directamente con el querellado, como nuevo Consejero de Desarrollo Económico del Gobierno de Navarra, con idéntica finalidad de obtener financiación. Tras dos reuniones -en las que solo estuvo presente el querellado-, el Gobierno de Navarra aprobó, en la sesión del 9 de septiembre de 2015, instar a SODENA para que aportara el apoyo correspondiente a DAVALOR. Acuerdo que no se encontraba en el orden del día, sino que fue introducido en la sesión por el procedimiento extraordinario a propuesta del Sr. Arsenio, sin justificar su urgencia.

El acuerdo se adoptó, según se expone en la querella, sin la obtención previa de un informe emitido por los servicios técnicos de la entidad y sin conocer la situación financiera de DAVALOR en septiembre de 2015, a propuesta del querellado y pese a conocer el sentido del informe de junio de 2015, que le fue facilitado por el Director Gerente.

En la misma sesión, el Gobierno de Navarra declaró el proyecto empresarial de DAVALOR como de «interés foral», lo que, según el art. 4 de la Ley Foral 15/2009, de 9 de diciembre, de medidas de simplificación administrativa

para la puesta en marcha de actividades empresariales, supone el impulso preferente y urgente del mismo y una simplificación de los plazos de los trámites administrativos.

Nunca se justificó la urgencia, si bien, según señaló D^a Uxue Barkos Berrueto (Presidenta del Gobierno de Navarra en dicha fecha) en la Comisión de investigación Parlamentaria que se siguió por estos hechos, la misma estuvo motivada por la «propia situación financiera de la empresa, Tampoco se recabó la autorización expresa del Parlamento de Navarra para la concesión del préstamo».

3.- A continuación, el querellado convocó al Consejo de Administración de SODENA para el día 17 de septiembre de 2015, órgano que debía aprobar el apoyo financiero de 1.000.000 euros instado por el Gobierno Navarro, si bien con carácter previo (el día 14 de septiembre de 2015) resolvió el cese de todos los consejeros del órgano de administración (tanto las de designación política como los miembros independientes) para asumir personalmente toda la responsabilidad de la Sociedad pública, designando como consejeras a tres Directoras Generales del Departamento de Desarrollo Económico, recientemente nombradas por este y subordinadas jerárquicamente al mismo.

El día 17 de septiembre de 2015, el Consejo de Administración, con la composición indicada, incumpliendo los procedimientos internos de la Sociedad, sin contar con documentación alguna y sin la presencia del Director Gerente (como era costumbre del órgano de administración) o de los técnicos autores del informe de junio de 2015 (que hubieran podido ilustrar a las nuevas consejeras de lo previamente acordado por el Consejo de Administración), aprobó la concesión de un préstamo por importe de 1.000.000 euros, pese al riesgo de que algún acreedor pudiera instar el concurso de acreedores de DAVALOR, dada la situación de insolvencia que presentaba a dicha fecha y que fue el motivo del anterior rechazo del apoyo financiero solicitado de SODENA.

4.- En lugar de impulsar el proyecto que motivó la concesión del préstamo, DAVALOR destinó el dinero recibido a abonar una importante cantidad de dinero a un acreedor (que un día antes de la reunión mantenida con el querellado le anunció que había instado un concurso de acreedores), así como a financiar necesidades urgentes e inmediatas derivadas de gastos de personal, cuotas atrasadas a la Seguridad Social y deudas de la sociedad, e, incluso, al abono de la cantidad de 47.000 euros al Sr. Carlos Alberto, persona que había propiciado los encuentros con el querellado.

También deja de presentar las cuentas anuales desde el mismo ejercicio de 2015.

Incumplió sus obligaciones de pago con la Hacienda Pública de Navarra desde el año 2017, lo que motivó que la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Departamento de Desarrollo Económico y miembro del Consejo de Administración de SODENA, resolviese, en fecha 21 de febrero de 2017, denegar la concesión a DAVALOR de una subvención por importe de 318.569 euros.

El 31 de marzo de 2017 el Gobierno de Navarra le denegó una subvención por importe de 593.428 euros, con motivo de no encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias ni de la Seguridad Social.

Previamente, el 16 de julio de 2016, por idénticos motivos, el Departamento de Desarrollo Económico, dirigido por el querellado, declaró la pérdida de la subvención por importe de 1.345.315,60 euros, previamente concedida por la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Departamento de Desarrollo Económico.

5.- Pese a todos estos incumplimientos, SODENA no solo no hizo uso de la facultad de vencimiento anticipado, dando por extinguido el contrato y exigiendo la devolución del dinero, sino que aprobó conceder a DAVALOR cinco nuevos préstamos por importe total de 2.600.000 euros, financiados por el programa del Banco Europeo de inversiones que SODENA tenía concertado.

Préstamos que se concedieron aun a pesar del informe interno de SODENA emitido en octubre de 2016, elaborado con ocasión de una comparecencia del querellado en la Comisión de Desarrollo Económico del Parlamento de Navarra, donde se exponía que el Sr. Arturo debería haber solicitado la declaración de concurso de acreedores y se recogía la posibilidad de que cualquier acreedor pudiera hacerlo. Estos riesgos se pusieron, asimismo, de manifiesto en la sesión del Consejo de Administración de 25 de octubre de 2016, donde los técnicos de SODENA presentaron un análisis de riesgos cuyas conclusiones desaconsejaban el «rescate» de DAVALOR.

6.- La entidad DAVALOR SALUD S.L. fue declarada en concurso - instado por un acreedor- por medio de auto de 3 de julio de 2018 del Juzgado de lo Mercantil n° 1 de Pamplona. Concurso que fue calificado de culpable por sentencia de 26 de marzo de 2020 con base en dos fundamentos. El primero, por haber incumplido el deber legal de solicitar la declaración de concurso en el plazo de dos meses desde que hubiere conocido o debido conocer la situación de insolvencia. Situación de quiebra que, según el informe de la Administración Concursal, se produjo desde, al menos, diciembre de 2015. El segundo, por la falta de depósito de las cuentas anuales en el Registro Mercantil, esencial, según la sentencia, para su conocimiento por parte de los proveedores, lo que hubiera podido afectar a su toma de decisiones, ya que en las mismas se apreciaba «una situación de insolvencia notoria».

7.- El querellado, en una comparecencia pública, el día 20 de julio de 2018 admitió que la decisión de invertir en DAVALOR obedeció a una «corazonada» y reconoció que la tomó con un «carácter totalmente personal», si bien trató de ampararla en un informe de 9 de septiembre de 2015 emitido por la Directora General de Política Económica y Empresarial y Trabajo del Departamento de Desarrollo Económico y miembro del Consejo de Administración de SODENA, Doña Edurne Irigoien Edurne.

La Sra. Irigoien reconoció en la Comisión de Investigación Parlamentaria que emitió dicho informe sin contrastar ni tratar el asunto con ningún funcionario o técnico de SODENA y sin contacto alguno con las responsables de DAVALOR. La (única información con que lo elaboró fue la trasladada por el querellado, recogiendo las apreciaciones subjetivas que este le trasladó de su visita a la empresa como si se trataran de hechos contrastados.

El Sr. Fabio afirmó, en su comparecencia ante la Comisión de Investigación, que el día 7 de septiembre de 2015 (dos días antes de la emisión del referido informe) el querellado, en el transcurso de una comida, les aseguró que SODENA les iba conceder un préstamo por importe de 1.000.000 euros.

En un encuentro mantenido con varios parlamentarios, tras la visita efectuada a las instalaciones de la empresa el 30 de septiembre de 2016, Dña. María Inmaculada (representante del Partido Popular) preguntó a la Sra. Irigoien si volvería a prestar dinero a DAVALOR y, ante la respuesta negativa de esta, el querellado afirmó: «tú no, pero yo soy el Presidente y tengo la última palabra. Así que decido yo». Así lo aseveró la Sra. María Inmaculada en la Comisión de investigación Parlamentaria.

En la misma Comisión, el propio querellado admitió haber concedido préstamos y avales sin recabar la autorización expresa del Parlamento de Navarra que exige la Ley Foral de la Hacienda Pública, pese a haber sido el impulsor desde la oposición de la reforma de esta Ley en tal sentido. También reconoció que, si bien en ninguna de las actas de SODENA se reflejó la situación económica de DAVALOR, la misma era conocida por las consejeras de SODENA.”

Señalándose en el Auto reseñado, que,

“... Los hechos descritos en la querella y atribuidos a la persona aforada, en una valoración que, como se ha dicho, ha de ser necesariamente muy provisional, • podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos; Es por ello que, siendo necesaria la investigación de los hechos descritos en la querella, precede asumir la competencia y acordar la incoación del oportuno procedimiento, designando instructor a quien corresponda según el turno previamente establecido.”

Por lo que tiene interés a los efectos de la presente resolución y específicamente en el ámbito relativo a la información sobre los hechos delictivos y su tentativo encuadre en determinados tipos del código Penal, ya “ab initio”, existió una explícita descripción sobre los hechos punibles en su dimensión fáctica.

Igualmente resulta de interés señalar, que, en el escrito de querella –DE 2 tomo I a partir de la página 59-, se planteó un amplio elenco de diligencias de averiguación a practicar, en el que se postulaba el recibimiento de declaración en calidad de investigado exclusivamente con relación al señor Miguel.

(ii) El Sr. Arsenio, compareció procesalmente representado, ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo con fecha 13 de enero de 2021 –DE 3, página 394-, solicitando al amparo de lo dispuesto en el artículo 234 LOPJ copia de la querella, requiriéndosele en virtud de DIOR datada el 20 de enero de 2021 para que justificara su interés.

(iii) Mediante Auto dictado por el Excmo. Sr. Magistrado instructor con fecha 21 de enero de 2021, se acordó incoar el procedimiento de Diligencias Previas, especificándose, que la señalada disposición se establecía con arreglo a lo señalado en el precedente Auto de 1 de diciembre refiriéndose en su fundamento de derecho 2º el tenor literal de la redacción entonces vigente del artículo 118 LECrim; acordándose en su parte dispositiva el traslado de la querella a D. Miguel y que se le instruyera conforme las precisiones del expresado artículo 118 LECrim.

La comunicación así acordada, se llevó a efecto mediante “acta de instrucción de derechos”, formalizada con el Sr. Arsenio y autorizada por la Sra. letrada de la Administración de Justicia de la Sala de lo civil y penal con fecha 28 de enero de 2021 –DE 3, página 458 -. En el acta extendida a tal efecto, el Sr. Arsenio hizo constar “de la lectura de lo anterior se deduce que no está en situación de investigado”.

A los efectos de cuanto aquí se acaba de señalar, resulta de interés concretar, (a) cabe fijar el “dies a quo” para el inicio del cómputo de plazo de investigación, con fecha 21 de enero de 2021, (b) desde el 28 de enero de 2021, el Sr. Arsenio, tuvo cabal conocimiento, de su situación de “querellado”, y la completa información, del íntegro contenido de la querella.

(iv) Mediante escrito presentado por la representación procesal el Partido Político, Unión Del Pueblo Navarro, ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo con fecha 21 de enero de 2021, solicitó un pronunciamiento sobre las que calificó como “medidas de prueba”, propuestas en el apartado 8 de en su escrito de querella.

En virtud de lo dispuesto por Auto dictado por la Sala 2ª del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2021, se determinó la “incompetencia sobrevenida de la Sala” y acordó la revisión de los autos al Juzgado Decano de los de instrucción de Pamplona.

(v) Recibidos que fueron los autos en esta Ciudad y turnados en definitiva al Juzgado de Instrucción número 2, mediante Auto de 9 de marzo de 2021 -DE 10-, se acordó incoar -con las oportunas precisiones respecto al cauce procesal que en definitiva hubiera de seguirse, según a continuación señalaremos- “Diligencias Previas”, concretándose, con una delicada minuciosidad respecto del ámbito objetivo y subjetivo de la causa penal -el párrafo destacado es nuestro-,

“...para el esclarecimiento de la supuesta comisión de un delito de prevaricación y un delito de malversación de caudales públicos por parte de **Arsenio y, en su caso, otras personas, bien como coautores, inductores o cooperadores necesarios, bien como cómplices.**”

Señalándose a este respecto en el precedente FD 3º -con igual precisión respecto del párrafo destacado como propio -,

“Considerándose pertinentes para el esclarecimiento de los hechos, procede practicar las diligencias que se dirán de entre las propuestas en el punto ocho de la querella criminal en su día presentada, **resolviéndose respecto de la declaración del investigado y de los testigos propuestos por el querellante una vez se hayan practicado el resto de diligencias que se acuerdan en la presente resolución** y se haya resuelto sobre el trámite procesal que haya de dársele a la presente causa”.

Igualmente se admitieron “...los documentos 1 a 20 aportados con el escrito de querella, salvo el número 8, que no se encuentra en el procediendo remitido por el Tribunal Supremo, por lo que deberá reclamarse directamente a SODENA junto con el resto de la documentación que se solicita por la parte querellante”

Así como las diligencias solicitadas en el apartado “2º MÁS DOCUMENTAL del apartado octavo del escrito de querella”.

Disponiéndose la práctica de las siguientes diligencias:

“- Oficiase al Excmo. Sr. Presidente del Parlamento de Navarra para que disponga lo necesario para que se remita a éste Juzgado de Instrucción, preferentemente en formato electrónico que permita la búsqueda y localización de palabras, las transcripciones de las actas de la Comisión de Investigación que se constituyó el 31 de octubre de 2018 y cuyas conclusiones se emitieron el 22 de marzo de 2019 y que tuvo por objeto las operaciones desarrolladas por Sodena desde el año 2005. En caso de no ser posible remitir la transcripción en el formato solicitado, deberá remitirse lo interesado en formato videográfico o, al menos, en audio, con el correspondiente índice de su contenido en relación a las diversas intervenciones que se realizaron en dicha comisión de investigación.

Igualmente, deberá remitirse certificación de quien corresponda comprensiva de las autorizaciones que el Parlamento de Navarra haya concedido para que las entidades dependientes de la Comunidad Foral -entidades públicas empresariales, fundaciones públicas y sociedades públicas- presten fondos a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, conforme a lo previsto en el artículo 82 bis y 82 ter, apartados 2 y 5 de la Ley Foral 13/2007, de 4 de abril, de la Hacienda Pública de Navarra, en la redacción dada por Ley Foral 10/2014, de 16 de mayo, con indicación de la fecha del acuerdo parlamentario y del importe autorizado.

- Reclámese a la Directora Gerente de SODENA la siguiente información, que deberá remitirse a la mayor brevedad y, en todo caso, en el plazo de diez días:

❖ Composición de los Consejos de Administración de SODENA en el periodo 2010 a 2020, ambos incluidos.

❖ Proyectos empresariales que recibieron el apoyo financiero de la entidad en el referido periodo, tanto de origen local como atraídos del exterior, especificando, respecto de cada uno de ellos, fórmula elegida para el apoyo (participación en el capital, préstamos participativos, etc) e importe total, agrupándolos en función de la fórmula elegida.

❖ Respecto de los proyectos apoyados mediante cualquier tipo de préstamo en dicho periodo, actas de los Consejos de Administración de SODENA donde se decidió apoyar cada uno de esos proyectos, así como informe o informes tomados en consideración por el Consejo de Administración para otorgar el apoyo financiero de la entidad, agrupando la información por proyecto aprobado (acta de aprobación e informe o informes respectivos).

❖ *Copia compulsada de todos los informes que haya podido emitir cualquier órgano, departamento o sección de SODENA en relación al apoyo financiero de dicha entidad a la mercantil DAVALOR, S.L, ordenados cronológicamente y con indicación de las personas u órganos destinatarios de dichos informes.*

❖ *Convocatoria del Consejo de Administración de 17 de septiembre de 2015.” (vi) El Ministerio Fiscal compareció con fecha 16 de marzo de 2021 -DE 24-, mostrando una inequívoca posición procesal acusatoria, apuntando a una concreta calificación jurídica de los que denominó “hechos objeto del procedimiento”, como un delito de prevaricación del artículo 404 CP y un delito de malversación de caudales públicos del artículo 432.1. 472.3 b) y último párrafo CP en relación con el artículo 252 CP.*

Mostrando su posición contraria a que se siguiera el Procedimiento ante el Tribunal del Jurado.

(vii) El Sr. Arsenio, se personó con fecha 17 de marzo de 2021 -DE 34-; teniéndosele por personado **en la posición jurídico procesal de “investigado”**, mediante Providencia de 18 de marzo de 2021-DE 46-.

En igual resolución se acordaban nuevas diligencias de averiguación.

(viii) En Providencia de fecha 23 de noviembre de 2021 -DE 53 -, además de tenerse por recibida determinada documentación que había sido requerida y acordarse en relación con la misma nuevas diligencias, se acordó -“... Para un mejor manejo de la documentación que se ha reclamado y pueda reclamarse en el futuro, ábranse tantas pieza separada de documentación, tanto en papel como informáticamente, como entidades u organismos permitan dicha documentación, incorporándose dichas piezas separadas y no los autos principales y la documentación que se vaya remitiendo por cada una de ellas.”

De este modo constan en el sistema de gestión procesal 11 piezas, con las referencias señaladas.

(ix) Después de seguirse un completo trámite contradictorio mediante Auto de fecha 23 de marzo de 2021 -DE 53-, se acordó la transformación de las Diligencias Previas en Procedimiento Sumario Ordinario, desechándose, en virtud de lo argumentado en el FD 2º que se siguiera el Procedimiento ante el Tribunal del Jurado -“... sin perjuicio de que, de constatarse durante la instrucción que no existen indicios racionales de criminalidad por un delito de prevaricación pero sí, únicamente, por uno de malversación, procediese en ese momento la transformación del procedimiento, tal y como dispone los artículos 309 bis y 760 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.”

Verificándose a los efectos que son propios de la presente resolución, una importante precisión, al razonar en el FD 3º sobre la adecuación a Derecho de la opción por el cauce procedimental que se establecía, en el sentido de que,

“ A lo anterior me empuja el hecho de que, en este estadio inicial del procedimiento, no sea aún posible afirmar la existencia de indicios racionales suficientes de la comisión de un delito de malversación (tampoco de prevaricación, obviamente), siendo precisamente la finalidad de la instrucción penal la práctica de las diligencias de investigación pertinentes para apreciar la existencia, o no, de indicios delictivos. Lo que no es procesalmente correcto es instruir una causa por un cauce procesal inadecuado y transformar el procedimiento en el momento en que se aprecien indicios de criminalidad, pues ello implica una cierta pervisión del sistema previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si en algún momento de la instrucción se constatan dichos indicios racionales lo que procederá será el dictado del correspondiente auto de procesamiento, que es lo que prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal para el procedimiento sumario.” (x) En Providencia datada el 7 de abril de 2021 -DE 105-, se acordó, en relación con un escrito y documentos que lo acompañan (DDEE 79 a 88) presentado por la defensa de Arsenio,

“Se admiten todos los documentos aportados con dicho escrito y respecto del resto de la documental que se solicita, se acuerda:

- Respecto a lo solicitado en el punto 3º, no ha lugar, al no ser necesaria la diligencia de cotejo, sin perjuicio del derecho de cualquiera de las partes a poner de manifiesto cualquier irregularidad o falta de coincidencia con el original de la copia presentada, en cuyo caso se acordará lo procedente.

-En relación al punto 4º, se requiere a la parte para que explique la finalidad de la diligencia, a fin de valorar su pertinencia, teniendo en cuenta que ya consta incorporado al procedimiento el audio de dicha sesión secreta, aunque no se haya incorporado a la pieza correspondiente por razón del tamaño del archivo.

-En relación al punto 6º, reclámese del Parlamento de Navarra la documentación que se solicita.

-Respecto del punto 7º, reclámese a Sodena dicha información.

-Respecto del punto 10º, reclámese a Sodena certificación literal de la “nota jurídica” emitida el 23-2-2017 por el Secretario del Consejo de Administración referente a los acuerdos del Consejo de Administración de Sodena

SL en relación con el Proyecto Davalor, con indicación de la causa de la redacción de dicha nota, es decir, quién solicitó dicha información y a quién fue entregada la misma.

Únase, igualmente, a la correspondiente pieza el escrito y documentación que lo acompaña, remitido por Sodena, S.L. con fecha 31 de marzo de 2021, dando contestación a los puntos 2 y 3 del oficio de 10 de marzo de 2021, información reclamada en oficio de 18 de marzo de 2021 y punto 3 del oficio de 23 de marzo de 2021.” (xi) Mediante un amplio escrito presentado por la representación procesal del Sr. Arsenio fechado el 7 mayo 2021 -DE 138-, al que se acompañaban diversos anexos documentales, se solicitaron diversas y variadas diligencias de averiguación, que fueron acordadas en Providencia datada el 10 de mayo -DE 150-.

Igualmente, en Providencia datada en la misma fecha 10 de mayo de 2021 -DE 143-, se acordaron diferentes diligencias de averiguación de oficio y a instancias de la acusación.

(xi) En virtud de providencia datada el 19 de mayo de 2021 -DE 164-, se acordó -los párrafos destacados son nuestros:

“Visto el estado de las presentes actuaciones y considerándose **necesario para determinar si existen o no indicios delictivos en los hechos objeto de la querella criminal interpuesta, así como su autoría, en su caso,** procédase por la **inspectora de la Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía con número profesional NUM000** a analizar toda la documentación que obra en las actuaciones a fin de **realizar un informe detallado** que deberá tener el siguiente alcance:

- Corroborar la realidad de las afirmaciones que se contienen en el escrito de querella sobre: o Iter de la solicitud de apoyo financiero de Davalor Salud, S.L. desde el primer contacto en 2011 hasta 2015 (mayo y septiembre), analizando documentación y declaraciones prestadas por los distintos intervinientes en la comisión de investigación parlamentaria y la documentación aportada por el Gobierno de Navarra sobre la agenda del Sr. Arsenio tras su nombramiento como vicepresidente del Gobierno de Navarra. o Análisis comparativo del informe sobre Davalor Salud, S.L. de junio de 2015 y el de septiembre de 2015. o Si se respetaron las condiciones impuestas para la concesión del primer préstamo antes de materializar el traspaso del dinero concedido. o Si cuando se concedieron las restantes ayudas a Davalor Salud, S.L. se estaban o no cumpliendo las condiciones y garantías impuestas en los anteriores acuerdos y, en caso de no cumplirse, motivación sobre la concesión de nuevas ayudas a pesar de ello, debiendo indicarse igualmente si en los informes existentes con anterioridad a cada nueva ayuda concedida se ponían de manifiesto posibles incumplimientos de las condiciones de ayudas anteriores, causas de disolución de la sociedad o riesgo de declaración de concurso de acreedores.
- Análisis y exposición de la normativa de aplicación a los apoyos financieros a empresas y proyectos empresariales que el Gobierno de Navarra lleva a cabo a través de Sodena, S.L. o sus predecesoras, Sodena S. A. y Nafinco, con referencia tanto a la normativa interna de las referidas sociedades (protocolos, guías de buenas prácticas o usos habituales) como a la externa (legal o reglamentaria).
- Análisis y exposición de las operaciones de apoyo financiero llevado a cabo por Sodena, S.L. o sus predecesoras, Sodena S. A. y Nafinco en función de los siguientes criterios, que se estiman son los de interés para la presente causa:

OBJETO DE ESTUDIO: empresas ya constituidas, con una cierta antigüedad (al menos tres años), en las que la ayuda solicitada, concedida o denegada, lo sea en cuantía superior a 250.000 euros.

PERIODO A ANALIZAR: 2010 a 2020, ambos incluídos.

CUESTIONES GENERALES A ANALIZAR:

- Fecha de la solicitud de la ayuda.
- Fecha de la concesión o denegación de la misma.
- En los supuestos de concesión de las ayudas, cuantías solicitadas y cuantías concedidas • Documentación que se aporta por la empresa solicitante junto con la solicitud de la ayuda económica (tipo de información y volumen)
- Información o documentación que se solicita a la empresa por parte de SODENA, bien de forma inicial, bien de forma sucesiva (incluyendo la solicitada para resolver sobre nuevas ayudas a la misma empresa o proyecto).
- Acomodo de la tramitación, análisis y confección del correspondiente informe a los protocolos, guías de buenas prácticas o usos habituales de Sodena, S.L, Sodena S.A y Nafinco.
- Resultado del apoyo financiero: impacto positivo o negativo en los resultados de la entidad (Sodena, S.L, Sodena S.A y Nafinco), criterios usados por la entidad para determinar si el impacto ha sido positivo o negativo y cuantificación, en su caso, de los impactos negativos.

INFORMES TÉCNICOS DE SODENA:

- Número de informes respecto de cada expediente • Tiempo entre la solicitud de ayuda y la emisión del informe definitivo elevado al consejo de administración.
- Contenido estándar de los informes elevados al consejo de administración (extensión habitual, aspectos analizados, documentación estudiada, otros) • Contenido específico, en su caso.
- Si están o no firmados por alguien: en caso afirmativo, por quién.
- Si contienen una recomendación o conclusión (en sentido amplio y cualquiera que sea su denominación) sobre acceder o rechazar la solicitud de ayuda.
- Coincidencia o discordancia entre la propuesta del informe y la decisión final del consejo de administración.
- Relación entre complejidad del informe y la cuantía de la ayuda concedida (verificar si a mayor cuantía, mayor complejidad del análisis).

ACUERDOS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

- Composición de los consejos de administración y gerencia de Sodena S.L, Sodena S.A. y Nafinco en el periodo 2010 a 2020 y perfil (equilibrado, o más político, o más profesional) de cada uno de dichos consejos.
- Tiempo entre la solicitud de la ayuda y la decisión del consejo sobre la concesión o denegación de la ayuda.
- Unanimidad o mayoría del acuerdo.
- Presencia o no del director gerente de Sodena en la reunión donde se adopta el acuerdo.
- Coincidencia o no entre la propuesta del informe técnico y la decisión tomada por el consejo.
- En los casos de discrepancia entre la propuesta contenida en el informe técnico y la decisión del consejo de administración, contenido de la motivación del acuerdo del consejo y si dicho acuerdo ha venido precedido, o no, de nuevos informes.
- En los casos de acuerdo favorable a la concesión de apoyo financiero, si se han exigido condiciones, avales y otras garantías o no.
- En los supuestos de imposición de condiciones, tipología de éstas: entrada de SODENA en el capital social, en los órganos de administración de la sociedad, limitaciones al reparto de beneficios o a los honorarios de sus directivos, condiciones resolutivas del préstamo, condiciones suspensivas, prestación de avales u otras garantías, determinación exacta del destino que ha de darse el dinero prestado, otras).
- En los supuestos en los que se hayan impuesto condiciones o garantías, actuación de SODENA ante el incumplimiento de dichas condiciones o garantías (plazo de reacción frente a la constatación del incumplimiento, tipo de reacción y si se han seguido dando nuevos apoyos financieros tras la constatación de incumplimientos de dichas condiciones o garantías).
- Análisis detallado de los supuestos en los que, pese a existir informes técnicos negativos previos, el consejo de administración ha concedido finalmente apoyo financiero a una empresa o proyecto.

EXPEDIENTES DE INVERSIONES DE INTERÉS FORAL

- Análisis comparativo de los expedientes administrativos de declaración de determinadas inversiones como de interés foral (fecha y forma de inicio del expediente, resoluciones administrativas y documentación obrante en el expediente, fecha y motivación del acuerdo del Gobierno de Navarra).

ACUERDOS DEL GOBIERNO DE NAVARRA

- Análisis comparativo de los acuerdos adoptados por el Gobierno de Navarra instando o autorizando a Sodena, S.A. Sodena, S.L. o Nafinco a dar apoyo financiero a determinadas empresas (fecha del acuerdo, si estaba o no incluido en el orden del día, contenido del acuerdo, motivación)."

Estableciéndose en la expresada resolución muy precisas determinaciones, acerca del carácter y alcance de la intervención de la funcionaria designada para la realización de informe, en su calidad de Policía judicial comisionada del Magistrado instructor, señalándose específicamente que "...en tal carácter, podrá requerir el auxilio necesario de las autoridades y, en su caso, de los particulares, singularmente de Sodena, S.L. No obstante, en caso de considerar necesaria la petición de más información al Gobierno de Navarra o al Parlamento de Navarra, deberá exponerse de forma motivada a este proveyente, a fin de que se libren, en su caso, los correspondientes oficios.

E igualmente se cuidaba de determinar que *“únicamente deberá reportar y dar cuenta a éste magistrado y, en caso necesario, a la comisaria jefe de la Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía, sin que dicha dación de cuenta o de información pueda extenderse a ningún otro funcionario público o autoridad”*.

(xii) A solicitud de la inspectora de la Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía con número profesional NUM000, en oficios datados el 27 de julio de 2021-DDEE 186,188,189,190 191- y de 30 de agosto de 2021 -DE 207- , se precisó, se completó e incluso ampliaron el contenido de las diligencias de investigación comprobación documental, ..., encomendadas.

(xiii) La representación procesal del Sr. Arsenio, mediante escrito presentado con fecha 20 de junio de 2021 -DE 176- solicitó la práctica de determinadas diligencias de averiguación, de carácter documental.

(xiv) Mediante Providencia de 7 de septiembre de 2021, y a la vista de la documentación remitida por SODENA en contestación al requerimiento de documentación realizado mediante oficio de 28 de julio, se convocó a la Directora Gerente de SODENA una reunión con el Ilmo. Sr. magistrado instructor el día 9 de septiembre de 2021, a la que asistió la Inspectora de la Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía con número profesional NUM000, y a la que pudieron asistir los letrados de la querellante y del querellado.

Según consta en oficio datado el 21 de septiembre de 2021 suscrito por la expresada Inspectora:

“... respecto a la reunión mantenida durante el pasado día 9 de septiembre de 2021, en las dependencias de Su Juzgado, con D^a. Edurne, D^a. María Virtudes y D^a. Esperanza en representación de SODENA, y la defensa letrada del investigado D. Arsenio, se acordó que se otorgara un nuevo plazo, respecto al ya ordenado en el Oficio de julio de 2021 para la entrega de documentación solicitada.

Previo al establecimiento del nuevo plazo, el personal de SODENA comunicaría una estimación del posible tiempo que le llevaría recopilar la documentación requerida.

El pasado 20 de septiembre de 2021, tras contactar telefónicamente D^a. Edurne con la Inspectora 132.329 para comunicar que actualmente todavía no dispone de la referida estimación temporal para la entrega de la referida documentación se SOLICITA, si S.S^a tiene a bien, para que:

- Solicite a SODENA la entrega de manera urgente del punto 10.1. solicitado mediante el Oficio de julio de 2021: “Respecto de los proyectos empresariales cuyo apoyo financiero se solicitó en forma de cualquier tipo de préstamo por importe superior a los 250.000 euros (tanto los que recibieron ese apoyo, como los que no lo recibieron) durante el período 2010-2020 ambos inclusive: 10.1. Tabla identificativa de las referidas operaciones financieras detallando en la misma, la entidad peticionaria y proyecto empresarial, fecha de solicitud de la ayuda, fecha de concesión o denegación, cuantía solicitada, cuantía finalmente otorgada, tipo de préstamo concedido, relación de documentos que se aportan de cada proyecto empresarial”.

- Reitere a SODENA, la necesidad de aportar toda la documentación requerida, mediante el Oficio de julio de 2021.

No obstante, precisar que respecto a la cuestión solicitada en el punto 10.4. sobre la información requerida por SODENA a las empresas solicitantes “de forma sucesiva”, y con el único propósito de dinamizar la recepción de la referida información, se haga entrega de esa documentación únicamente para las empresas privadas que hayan recibido dos o más apoyos por parte de SODENA en forma de préstamo, sin perjuicio de solicitar con posterioridad, para el resto de expedientes esos requerimientos sucesivos de información y de cumplimiento de condiciones contractuales.

-Solicite a SODENA la entrega del contrato de préstamo suscrito entre las partes, para todas las operaciones financieras que cumplan los requisitos establecidos en el punto 10 del Oficio de julio de 2021 (proyectos empresariales cuyo apoyo financiero se solicitó en forma de cualquier tipo de préstamo por importe superior a los 250.000 euros (...)) durante el período 2010-2020 ambos inclusive”.

(xv) La representación procesal del Sr. Arsenio, mediante escrito ampliamente fundamentado, datado el 26 de octubre de 2021 -DE 215- solicito -que- *“... tan pronto como concluya la práctica de las restantes pruebas acordadas, se acuerde el SOBRESEIMIENTO LIBRE de las diligencias”*.

La expresada pretensión se basaba en ocho alegaciones, relativas respectivamente a,

<< PRIMERA.-LAS EXCEPCIONALES CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DAVALOR. 1.- EL PRODUCTO SUPONÍA UNA INNOVACIÓN RADICAL FRENTE A LA OPTOMETRÍA CLÁSICA 2.- EL PRODUCTO ESTABA PRÁCTICAMENTE ACABADO Y LISTO PARA COMERCIALIZARSE. 3.- NO EXISTÍA COMPETENCIA DIRECTA NI DEL PRODUCTO NI DEL SERVICIO OFERTADO POR DAVALOR Y EL POTENCIAL MERCADO ERA ENORME. 5. -TODAS LAS ÓPTICAS CONSULTADAS VALIDABAN EL PRODUCTO Y LA TECNOLOGÍA Y LO CONSIDERABAN ALGO ÚNICO. 6.- CON ALCANZARSE EL 3’9 % DE LAS PROYECCIONES

ECONÓMICO FINANCIERAS ESTIMADAS POR DAVALOR EL PROYECTO SERÍA ECONÓMICAMENTE VIABLE.
7.- EL PROYECTO DAVALOR CUMPLÍA HOLGADAMENTE LA DEFINICIÓN DE PROYECTO OBJETIVO.

SEGUNDA.- EL RELATO CONFECCIONADO POR LA PARTE QUERELLANTE FRENTE A LA REALIDAD DE LO OCURRIDO. TERCERA.- EL ACUERDO DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE 9-9-2015. POR QUÉ EL GOBIERNO DE NAVARRA (NO EL SR. Arsenio) ACORDÓ INSTAR A SODENA A PRESTAR APOYO FINANCIERO A DAVALOR. CUARTA.- EL ACUERDO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SODENA DE 17-9-2015.

QUINTA.- LA CONCESIÓN DE LOS PRÉSTAMOS DAVALOR RESPONDÍA A LOS FINES DE SODENA Y ERA ACORDE CON LA TRAYECTORIA HISTÓRICA DE SODENA. SEXTA.- POR QUÉ NO SE INSTÓ EL VENCIMIENTO ANTICIPADO DEL PRÉSTAMO, NI LOS SERVICIOS TÉCNICOS DE SODENA PROPUSIERON HACERLO. SÉPTIMA.- POR QUÉ EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE SODENA (NO EL SR. Arsenio) ACORDÓ CONCEDER A DAVALOR LOS SIGUIENTES PRÉSTAMOS, TRAS LOS INFORMES TÉCNICOS DE SODENA QUE LA QUERELLANTE "SE OLVIDA" DE MENCIONAR EN SU QUERRELLA. OCTAVA.- EL COLMO DEL DESPROPÓSITO: LA ALEGACIÓN DE QUE EL SR. Arsenio "INCUMPLIÓ SU PROPIA NORMA DANDO AVALES POR CUANTIOSOS IMPORTES SIN LA APROBACIÓN PARLAMENTARIA".>>

Para mantener como "reflexión final",

<< **UPN ha "montado" una querella absurda** (imputando al Sr. Arsenio sendos delitos por unas decisiones de unos órganos colegiados) **con argumentos falsos y que sabe que son falsos** (gran parte de la documentación aportada a este procedimiento ya la conocía UPN a través del Parlamento) **y después de que la Cámara de Comptos hubiera analizado los préstamos a DAVALOR sin observar indicio alguno** no ya de delito, sino **ni siquiera de irregularidad administrativa alguna** (informe cuya existencia, por supuesto, se omite en la querella). No lo ha hecho porque UPN considerase realmente que los préstamos a DAVALOR fueran consecuencia de ningún delito: **sabe perfectamente que una de las funciones de SODENA es apoyar empresas en dificultades, sobre todo cuando el apoyo se destina a proyectos tan excepcionales y únicos como era éste**, al que el propio Gobierno de UPN le había concedido el "sello Moderna" por considerar que suponía una absoluta revolución en el ámbito de la optometría a nivel mundial y, si se cumplía el plan de negocio, DAVALOR iba a ser una multinacional con sede social en Navarra.

Tampoco lo ha hecho porque los 2'6 millones de euros que se invirtieron en este proyecto de I+D+i **no dieron el resultado esperado**, pues **teniendo en cuenta que gobernando UPN, SODENA** (y su antecesora NAFINCO) autorizó operaciones que generaron pérdidas muy relevantes (34 millones en Sunsundegui; 20 millones en Dynamobel; 19'6 millones en el asunto IBERDROLA; 8'7 millones en Caviar Per Se; más de 12 millones en el préstamo del BEI (que no incluyen los saldos incobrables); 20'2 millones en Obdulio y Virginia; 6 millones en EINA; 3'5 millones en MTS TOBACO, etc...), **sin que UPN ejercitara acción penal alguna, parece que UPN es consciente de que un apoyo financiero fallido no equivale a un apoyo financiero delictivo. Lo ha hecho porque UPN quería cobrarse una "pieza política"** y sabía que como consecuencia del artículo 68 de la Ley Foral 14/2004 de 3 de diciembre (en su redacción vigente hasta el 10-5-2021) si lograba un auto que estableciera la condición de investigado del Sr. Arsenio, tendría que dimitir o ser cesado.

Que en un Parlamento se digan todo tipo de barbaridades e inconsistencias, con el exclusivo propósito de desgastar al adversario político, sin que ello tenga la más mínima consecuencia, es algo a lo que estamos acostumbrados.

Pero ante un Juzgado de instrucción hay que ser más serios, y, cuando se actúa como acusación particular o popular, hay que decir la verdad, cosa que es evidente que UPN no ha hecho en su "querella-mitín".

Hemos sido víctimas de una "caza política". La primera víctima ha sido el Sr. Arsenio obviamente, pero también este Juzgado, que está teniendo que dedicar recursos en una investigación absolutamente exhaustiva, de la Sra. Jacinta encargada de analizar la ingente documentación, por no hablar de los recursos que han tenido que dedicar el Parlamento y el Gobierno de Navarra para responder a los oficios de este Juzgado, o los que está dedicando SODENA con esa misma finalidad. En definitiva, además del gasto en la salud psíquica del Sr. Arsenio, gasto ingente de recursos públicos para investigar (en sede parlamentaria y judicial) una denuncia absolutamente temeraria (cuyo único fin es obtener réditos políticos) por una inexistente malversación de fondos públicos (qué paradoja).

Y así, instrumentalizando la Jurisdicción penal, UPN ha conseguido su "pieza política" y el Gobierno de Navarra ha perdido un Consejero y Vicepresidente plenamente comprometido con el interés general de Navarra.>> (xvi) El informe de un amplísimo volumen, constando el mismo de más de 900 páginas y un USB, fue aportado por la Inspectora de la Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía con número profesional NUM001, con fecha 30 de enero de 2023 –DDEE 257,258 y stes-.

En sus conclusiones se hace constar,

<< A continuación, se exponen las principales conclusiones obtenidas tras la realización de los diferentes análisis encomendados por el Juzgado de Instrucción número 2 de Pamplona, mediante Providencia de 19/05/2021.

CONCLUSION 1

Siguiendo un orden cronológico de los hechos analizados se confirma que DAVALOR solicitó apoyo financiero a SODENA en varias ocasiones, desde su constitución en 2011 hasta 2014. En ninguno de los casos SODENA procedió a estudiar el proyecto por diferentes razones, tales como: competencia técnica, fase temprana del proyecto o contexto en el que se encontraba.

Algunos de los contactos llevados a cabo fueron directamente con miembros del Gobierno de Navarra. En todos los casos, el proceder de esas personas fue derivar el estudio del proyecto a SODENA, puesto que era la sociedad pública con competencia para valorar la concesión o no del apoyo financiero solicitado.

CONCLUSION 2

Tuvo lugar otra petición de apoyo financiero en febrero de 2015. El promotor del proyecto, Sr. Arturo, acudió nuevamente a miembros del Gobierno que derivaron el asunto a SODENA. Tras una primera reunión DAVALOR y SODENA, se acordó llevar a cabo un estudio del proyecto para analizar la participación en capital de DAVALOR por valor de 4.000.000.-€, a pesar de que la formula deseada por el promotor fuera el aval y en su defecto el préstamo.

Tras varios meses de análisis del proyecto, y una vez confeccionado el informe por el equipo técnico de SODENA, este fue elevado al Consejo de Administración de SODENA de 23/06/2015. El acuerdo adoptado no fue ni de concesión ni de denegación del apoyo financiero solicitado, sino que el Consejo requirió que DAVALOR justificase el cumplimiento de tres requisitos, *"con carácter previo a una posible consideración de lo solicitado"*.

Con la finalidad de proceder al cumplimiento y justificación de los requisitos requeridos, el equipo técnico llevó a cabo gestiones de apoyo a DAVALOR, documentalmente acreditadas hasta finales de julio de 2015.

CONCLUSION 3

En el verano de 2015, y tras las elecciones celebradas durante el mes de mayo, se constituyó un nuevo Gobierno en Navarra. El día 23/07/2015 fue publicado el nombramiento del querellado, el Sr. Arsenio, en sus cargos de Vicepresidente Primero del Gobierno de la Comunidad Foral de Navarra y de Consejero de Desarrollo Económico.

Tras la constitución del nuevo Gobierno, el Sr. Arturo junto con su intermediario, el Sr. Estanislao, con el objetivo de presentar el proyecto DAVALOR y solicitar nuevamente apoyo financiero a los nuevos miembros del Gobierno, decidieron contactar el día 31/07/2015, con el Sr. Arsenio, a través de secretaria.

CONCLUSION 4

Se han podido documentar dos reuniones entre los Srs. Arturo, Estanislao y Arsenio. El primero de los encuentros tuvo lugar el día 04/08/2015 en la planta de DAVALOR en Tajonar, para posteriormente acudir a las instalaciones de Jofemar (proveedor de DAVALOR). La segunda de ellas, consistió en una comida en Pamplona el día 07/09/2015.

El Sr. Arsenio no instó al promotor a contactar con SODENA u otra institución/organismo para el análisis del proyecto, a diferencia de como se había actuado en las ocasiones anteriores. El proceder del Vicepresidente y Consejero fue solicitar a su Jefa de Gabinete Técnico, la Sra. Cándida, ya la Directora General de Política Económica y Empresarial y de Trabajo, la Sra. Eurne (ambas recién incorporadas a sus nuevos cargos los días 06/08/2015 y 23/08/2015 respectivamente) el estudio y la confección de un informe sobre el proyecto DAVALOR.

CONCLUSION 5

Documentalmente existen evidencias de que el día 02/09/2015, la Sra. Cándida indicó a un potencial cliente de DAVALOR, que el Sr. Arsenio tenía intención de apoyar el proyecto DAVALOR mediante una propuesta en el Consejo de Gobierno del día siguiente.

Además, se ha incorporado a la causa un documento emitido y firmado por el promotor de DAVALOR, con fecha 2 de septiembre, en el que concretaba las partidas a las que iría destinado *"el Anticipo de un millón de euros solicitado al Gobierno de Navarra"*.

CONCLUSION 6

El día 03/09/2015, el Sr. Arsenio informó, durante la referida sesión de Gobierno, sobre los aspectos generales del proyecto.

Ese mismo día, "D2D" procedió a solicitar el concurso de acreedores para DAVALOR en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Pamplona con el defecto de forma de impago de las tasas judiciales, cuyo plazo de subsanación finalizaba el 18/09/2015. También ese día, tuvieron conocimiento de tales hechos el Director Financiero y el promotor de DAVALOR, siendo conscientes de que, si en el transcurso de 15 días no cancelaban su deuda con D2D, esta procedería al pago de las tasas judiciales, y el concurso desplegaría plenos efectos jurídicos.

CONCLUSION 7

El día 07/09/2015, se produjo el segundo encuentro acreditado entre los Sres. Arturo, Estanislao y Arsenio, según se describía en párrafos anteriores.

CONCLUSIÓN 8

El día 09/09/2015 se sucedieron diversos hechos de relevancia para el presente caso, como son:

(i) La emisión del Informe sobre DAVALOR de la Directora General de Política Económica, la Sra. Edurne. Respecto al análisis efectuado sobre el mismo, cabe poner de manifiesto lo siguiente:

El informe fue realizado en base a la información contenida en el informe de junio de 2015 llevado a cabo por el equipo técnico de SODENA y a los contrastes efectuados con dos clientes y dos proveedores.

No existe constancia documental de que la Sra. Edurne solicitara apoyo y/o información ni a personal técnico de su Departamento, ni al equipo de SODENA que previamente había estudiado el proyecto. Dicho proceder, fue confirmado por la propia autora durante su comparecencia ante la COMIN.

El informe no contiene un análisis económico-financiero propio que confirme la situación de la empresa y el proyecto DAVALOR actualizado a fecha de septiembre de 2015. En él, no se exponen cifras que definan la situación financiera y/o necesidades del proyecto, ni tampoco se detallan las previsiones en base al nuevo Plan de Negocio reformulado.

El informe está realizado sobre la base de ciertas referencias a información no actualizada del informe de junio de 2015 y a opiniones y pareceres de la propia autora, del Sr. Arsenio y del promotor del proyecto.

(ii) Emisión y elevación de las dos propuestas de acuerdo al Consejo de Gobierno, para declarar el interés foral del proyecto, y para que se instara a SODENA a otorgar un préstamo a DAVALOR, por valor de 1.000.000.-€. Propuestas introducidas ese mismo día, en el orden del día de la sesión de Gobierno, por la vía de urgencia.

(iii) Emisión de los dos Acuerdos de Gobierno por los que se acuerda tanto declarar el "*interés foral*" del proyecto DAVALOR, como instar a SODENA a que conceda el apoyo financiero en los términos arriba referidos.

(iv) Tras todo ello, DAVALOR informo a la entidad bancaria BBVA sobre el acuerdo del Gobierno de Navarra.

CONCLUSIÓN 9

Respecto al estudio Llevado a cabo sobre el acuerdo de Gobierno para la concesión del apoyo financiero a DAVALOR, deben indicarse las siguientes cuestiones:

El acuerdo de Gobierno sobre el proyecto DAVALOR es el único acuerdo, del total de los 12 analizados, en el que el Gobierno en vez de "autorizar", "insta" a SODENA a otorgar un apoyo financiero determinado.

El acuerdo de DAVALOR es el único, en el que el plazo otorgado a SODENA para realizar el mandato contenido es de "máximo 15 días". Para el resto, el plazo otorgado era de "durante el año".

El de DAVALOR es el único acuerdo de los analizados en el que no se especifica el procedimiento llevado a cabo para la tramitación de la propuesta de acuerdo al Gobierno ni la normativa aplicable.

El acuerdo sobre DAVALOR es el único, que no contiene referencia alguna a la base normativa que sostiene y fundamenta dicho apoyo financiero.

CONCLUSIÓN 10

Del análisis comparativo llevado a cabo sobre el Acuerdo de Gobierno para la declaración de interés foral del proyecto y de los correspondientes expedientes, debe mencionarse lo siguiente:

El proyecto DAVALOR es el único expediente de los 45 analizados sobre interés foral que ha sido calificado de interés foral y, a su vez, ha recibido apoyo financiero por parte de SODENA.

El hecho de obtener la calificación de interés foral permitió a DAVALOR presentar al proyecto como de "estratégico" para el Gobierno de Navarra y, por lo tanto, ostentar una mejor posición de cara a negociar con otros organismos una posible financiación.

El informe sobre el que se fundamentó la propuesta de acuerdo de Gobierno para declarar el interés foral es el mismo que el realizado para el otorgamiento del apoyo financiero, de la Sra. Edurne de 9 de septiembre.

El informe no fue elaborado respecto a la existencia de un proyecto concreto de inversión promovido por la empresa, sino que contiene aspectos generales de la compañía relacionados con la propia actividad social.

CONCLUSIÓN 11

El día 10/09/2015, un miembro del equipo técnico de SODENA, que había procedido al estudio del proyecto DAVALOR en junio de 2015, se puso en contacto con DAVALOR para la puesta al día del proyecto, transmitiendo la urgencia de reunirse en base al Consejo de Administración del jueves día 17/09/2015.

CONCLUSIÓN 12

El día 11/09/2015, se produjo la formalización de la póliza suscrita entre DAVALOR y el BBVA, en virtud de la cual la entidad financiera concedió un préstamo puente por importe de 1.000.000.-€ durante el plazo de un mes, hasta que DAVALOR recibiera el apoyo financiero de SODENA, cuya concesión se había instado mediante el Acuerdo de Gobierno de 09/09/2015.

CONCLUSIÓN 13

Se ha acreditado que el día 14/09/2015, tuvieron lugar los siguientes hechos:

(i) Entrada en vigor y materialización del préstamo suscrito entre el BBVA y DAVALOR. Desde ese momento, y sin contar todavía con la aprobación del apoyo por parte de SODENA, DAVALOR tuvo plena disposición sobre el uso de esos fondos.

(ii) Cese de los miembros del Consejo de Administración de SODENA y nombramiento de los nuevos consejeros, por la Junta de Socios de SODENA, es decir, el CPEN. o Se produjo el cese de un Consejo compuesto por un total de 8 miembros de los cuales 6 era de perfil independiente y 2 de perfil político. o El nuevo Consejo nombrado estaba compuesto por 4 personas, todas ellas de perfil político. Esos miembros eran el Sr. Arsenio y tres Directoras Generales dependientes de su Consejería de Desarrollo Económico; a saber: la Sra. Edurne (Dir. Gral. de Política Económica y Empresarial y de Trabajo), la Sra. Teodora (Dir. Gral. de Turismo) y la Sra. María Cristina (Dir. Gral. de Industria). o El único periodo desde la creación de SODENA, S.L en 2011, hasta finales de 2020, en el que el Consejo no contó con ningún miembro de perfil independiente fue, bajo la Presidencia del Sr. Ayerdi, entre el 17/09/2015 y octubre de 2017, es decir, aproximadamente durante dos años.

(iii) Convocatoria del primer Consejo de Administración de SODENA para el día 17/09/2015. o El Secretario del Consejo de SODENA, el Sr. Salvador, mediante correo electrónico notificó a los nuevos miembros, su nombramiento como Consejeras de SODENA por "indicaciones del Consejero y tras la decisión del socio imico de SODENA (CPEN)". A su vez, les adjuntó la convocatoria para el Consejo del 17 de septiembre. o No constan documentos adjuntos a la convocatoria, por lo que se desconoce la información previa con la que contaron las Consejeras, para tomar la decisión sobre la concesión del proyecto DAVALOR que constaba como cuarto punto del orden del día de la convocatoria. o No se respetó el plazo ordinario de convocatoria de 10 días según lo dispuesto en el artículo 18 de los Estatutos de SODENA. Por ello, debe presuponerse una convocatoria por la vía de urgencia prevista en el mismo artículo. La urgencia no queda justificada, ni acreditada en la convocatoria.

(iv) Reunión entre miembros de SODENA y DAVALOR. El día 14 de septiembre tuvo lugar la primera reunión acreditada entre miembros de SODENA (dos personas pertenecientes al equipo técnico que estudió el proyecto DAVALOR en junio) y de DAVALOR.

CONCLUSION 14

Existe constancia documental de la celebración de una segunda reunión, el día 16/09/2017 entre miembros de SODENA y DAVALOR y, además esta vez, también se contó con la presencia del Sr. Arsenio.

CONCLUSION 15

El día 17/09/2015, tuvo lugar la celebración del Consejo de Administración de SODENA, que aprobó por unanimidad la concesión de un préstamo a DAVALOR por importe de 1.000.000.-€ (el Maximiliano NUM002). Cabe precisar lo siguiente: o Durante la celebración de este Consejo, se procedió al cese del entonces Director Gerente, el Sr. Luis Enrique. o Este Préstamo NUM002 fue el {mico apoyo otorgado por SODENA entre 2010-2020 que, concedido en periodo vacante de Director Gerente, no se contó ni con su presencia, ni con la

de ningún miembro del equipo técnico de SODENA que detallara la situación del proyecto y la sociedad peticionaria.

CONCLUSION 16

Respecto a la concesión de este Maximiliano NUM002, y según lo determinado mediante el análisis comparativo efectuado en el Bloque III del presente informe, debe indicarse que: o La concesión de este apoyo financiero, Maximiliano NUM002, es el único caso de los 23 analizados, en el que se ha detectado que no existe un acomodo del proceso interno de SODENA, ya que no existió un análisis económico-financiero previo del equipo técnico de SODENA, ni tampoco informe de este, en el que se plasmaran los resultados del estudio y propuesta para ser elevada al Consejo de Administración. o Asimismo, de entre los apoyos otorgados por SODENA que han sido analizados, el único que no cuenta con documentación aportada o requerida fue este préstamo. o El Préstamo NUM002 de DAVALOR es el único caso en el que tras acudir la empresa peticionaria a SODENA, no obtener el apoyo solicitado y contactar con un miembro del Gobierno Foral (para el presente caso, el Sr. Arsenio); este no derivó nuevamente el estudio del proyecto a SODENA. En vez de eso, el proceder del Sr. Arsenio fue proponer al Gobierno Foral que acordara instar a SODENA a otorgar un préstamo a DAVALOR. En base a dicho acuerdo, el Consejo de SODENA concedió el apoyo solicitado sin haber sido analizado nuevamente el proyecto por el equipo técnico de SODENA, ni confeccionado informe alguno. o El destino de este Maximiliano NUM002 era "la cancelación de la póliza (se indica el número de cuenta bancario) firmada con fecha 14 de septiembre de 2015 por DAVALOR SALUD con el BBVA por importe de 1.000.000.-€ cuyos fondos se han destinado al a realización de los pagos recogidos en el Anexo II.". o En consecuencia, durante el periodo comprendido entre el día 14/09/2015 (fecha en la que DAVALOR tiene disponibilidad de préstamo concedido por el BBVA) y el NUM003, DAVALOR tuvo disponibilidad sobre el préstamo concedido por el BBVA y pudo hacer uso del mismo con anterioridad a la aprobación y conformidad de SODENA sobre el destino de esos fondos.

CONCLUSION 17

Tras la concesión del Maximiliano NUM002, SODENA otorgo en 5 préstamos adicionales durante los años 2016 y 2017, según se expone en la siguiente tabla resumen:

N	TIPO DE APOYO	FECHA APROBACION	IMPORTE	Referido como
1	Préstamo participativo	NUM003	1.000.000.-€	"Préstamo I"

2	Préstamo ordinario	NUM004	400.000.-€	"Préstamo NUM005"
---	--------------------	--------	------------	-------------------

3	Préstamo ordinario	NUM006	600.000.-€	"Préstamo NUM007"
---	--------------------	--------	------------	-------------------

4	Préstamo ordinario	NUM008	200.000.-€	"Préstamo NUM009"
---	--------------------	--------	------------	-------------------

5	Préstamo ordinario	NUM010	200.000.-€	"Préstamo NUM011"
---	--------------------	--------	------------	-------------------

6	Préstamo ordinario	NUM012	250.000.-€	"Préstamo NUM013"
---	--------------------	--------	------------	-------------------

CONCLUSION 18

El día NUM004, el Consejo de Administración de SODENA aprobó un Acuerdo Financiero Marco con DAVALOR, por el que se comprometía a otorgar a esta, los apoyos financieros en él contenidos, previo cumplimiento de las condiciones esenciales dispuestas en el mismo. En consecuencia, los restantes apoyos financieros otorgados a DAVALOR, es decir, desde el Maximiliano NUM005 al 6, encuentran su base en el precitado Acuerdo.

Se ha constatado la existencia de 3 informes de SODENA, emitidos con anterioridad a la aprobación del Acuerdo Financiero Marco, en los que ponen de manifiesto incumplimientos de DAVALOR de varias obligaciones contenidas en el clausulado del Maximiliano NUM002; no entrega de cuentas anuales, impago de intereses, incumplimiento de obligaciones de pago tributarias y con la Seguridad Social, pago de retribuciones laborales, entre otras...

También alertaban y desaconsejaban llevar a cabo nuevos apoyos financieros a DAVALOR, en base al riesgo concursal, la gran deuda acumulada, la necesidad de un apoyo financiero muy elevado (que no solucionaría los problemas de DAVALOR) y que no justificaba un impacto socioeconómico real en la Comunidad Foral; además del riesgo reputacional para el Gobierno de Navarra y la propia SODENA.

CONCLUSION 19 Y ULTIMA

Del estudio llevado a cabo sobre los incumplimientos de DAVALOR de sus obligaciones derivadas de las pólizas por las que se formalizaban los diferentes apoyos financieros otorgados por DAVALOR, se han podido acreditar las siguientes circunstancias:

Se han acreditado incumplimientos de DVS de las obligaciones contractuales contenidas en las pólizas ya suscritas con SODENA, al momento de la aprobación de los cinco apoyos financieros otorgados en base al Acuerdo de Financiación Marco. o De dichos incumplimientos tuvieron conocimiento tanto los miembros del equipo técnico, como del Consejo de SODENA, puesto que los mismos fueron puestos de manifiesto en los diferentes informes que el equipo técnico confeccionaba con anterioridad a la concesión del nuevo apoyo correspondiente. o También se ha constatado que los Prestamos NUM007, 4, 5 y 6 fueron concedidos previo incumplimiento de determinadas condiciones esenciales previas exigidas por el Acuerdo de Financiación Marco. o Del análisis llevado a cabo entre los 23 apoyos financieros, DAVALOR ha sido el único caso en el que se ha acreditado el incumplimiento de las condiciones esenciales previas. Además, tras ello SODENA procedió a la aprobación y correspondiente formalización del apoyo financiero solicitado. o Concretamente, el proceder de SODENA ante el conocimiento de tales incumplimientos de condiciones previas fue el siguiente: (i) para el Maximiliano NUM007, acordó la inclusión de una cláusula contractual de novación por la que procedía a prorrogar el plazo estipulado para el cumplimiento de la condición previa inobservada; (ii) para los Prestamos NUM009, 5 y 6, procedió a incluir una cláusula de novación contractual por la que suspendía la exigibilidad de las condiciones previas cuyo incumplimiento había sido detectado; además de acordar la no aplicabilidad de la causa de vencimiento correspondiente. o SODENA no denegó a DAVALOR ninguno de los nuevos apoyos financieros solicitados, ni tampoco procedió a la resolución contractual de las pólizas suscritas instando el reembolso de los fondos otorgados.>> (xvii) Por la representación procesal del Sr. Arsenio, mediante escrito datado el 28 de abril de 2023 -DE 279-, tras exponer que en opinión de la expresada postulación y tras reseñar que *"...en las páginas 709 a 910 del informe emitido por la Policía Nacional se relacionan los escritos y documentos que han sido analizados por la autora del informe, con indicación de la procedencia de cada escrito/ documento."*

Según se indica en la página 714, de los escritos y documentos que esta parte ha presentado en este procedimiento, la perito ha examinado los siguientes..."

Detallando a continuación los escritos y documentos presentados por la parte solicitante, para añadir,

"Es decir, la perito no ha examinado el escrito de esta parte de fecha 26-10-2021 en el que solicitábamos el sobreseimiento libre de las diligencias (y que aprovechamos para reiterar), ni la documentación acompañada al mismo, consistente en:

Documento nº 1: informe pericial emitido el 8-10-2021 por el economista, Auditor de Luis Antonio y Luis Antonio D. Celso.

Documento nº 2: "ficha proyecto Moderna" relativa al Proyecto Davalor.

Por otra parte, en las casi mil páginas del informe, no se hace una sola referencia al mencionado escrito de esta parte, ni al informe del Sr. de Cándida, ni la concesión del sello de "Proyecto Moderna" al Proyecto Davalor.

Al objeto de aclarar si la falta de examen de dicho escrito y documentos obedece a que la Sra. Perito no lo ha considerado oportuno o se debe a que no se ha puesto a su disposición, se interesa que se dirija oficio a la Policía Nacional para que indique si para la emisión de su informe dispuso de copia del escrito presentado por la defensa del Sr. Arsenio con fecha 26-10-2021 y la documentación acompañada al mismo y, en caso de respuesta negativa, se le facilite copia del mismo."

Para solicitar virtud de lo expuesto -que- "... remita a la Policía Nacional para que en relación al informe 1695/2023 indique al Juzgado si para la emisión del informe dispuso del escrito presentado por la defensa del Sr. Arsenio con fecha 26-10-2021 y la documentación acompañada al mismo.

En caso de respuesta negativa, se interesa que se le dé traslado del mencionado escrito con sus documentos."

Informando la Policía judicial, mediante oficio datado el 30 de mayo de 2023 -DE 305-, en el sentido de que,

"...La elaboración del informe 1695/23 fue confeccionado sin disponer del escrito y la documentación anexa de fecha 25 de octubre de 2021, presentada a esta causa por la representación procesal del investigado D. Arsenio.

Una vez analizado el referido escrito y la documentación anexa, se concluye que, la consideración de su contenido, no supone una modificación o ampliación del informe número 1695, presentado en ese Juzgado el pasado día 30/01/2023" (xviii) En este estadio de desarrollo procesal y sin ninguna otra aportación de elementos de convicción indiciaria, mediante Providencia datada el 28 de abril de 2023 -DE 288- se dispuso literalmente,

"Dada cuenta de las actuaciones, se acuerdan las siguientes declaraciones testificales:

Catalina, el 13 de septiembre de 2023 a las 9:00 horas.

Indalecio, el 13 de septiembre de 2023 a las 10:00 horas.

Luis Enrique, el 13 de septiembre de 2023 a las 11:00 horas.

Ginés, el 13 de septiembre de 2023 a las 12:00 horas.

Así mismo, se acuerda recibir declaración en calidad de investigados a:

YOLANDA María Cristina, el 13 de septiembre de 2023 a las 16:00 horas.

Marta, el 13 de septiembre de 2023 a las 17:00 horas.

Cándida, el 13 de septiembre de 2023 a las 18:00 horas. Edurne, el 14 de septiembre de 2023 a las 9:00 horas.

Arturo, el 14 de septiembre de 2023 a las 10:00 horas.

Estanislao, el 14 de septiembre de 2023 a las 11:00 horas.

Arsenio, el 14 de septiembre de 2023 a las 12:00 horas. Al estar personado en la causa, se le cita por medio de su representación procesal/letrada." **(xix)** Para completar el marco de las concretas circunstancias del caso, señalaremos **a.-** Mediante Autos datados concretamente: el 18 de febrero de 2022; de 31 de agosto de 2022; de 28 de febrero de 2023 y 24 de agosto de 2023, se acordaron sucesivas prórrogas del plazo de instrucción.

Siendo de destacar que en el primero de ellos expresamente se hizo constar: *"... Vistas las alegaciones realizadas por las partes, no habiéndose podido terminar la instrucción en el plazo legal de doce meses como consecuencia de la complejidad de la investigación y el volumen de documentación aportada y pudiendo ser pertinentes algunas de las diligencias de instrucción solicitadas por las partes para un completo esclarecimiento de los hechos (cuestión sobre la que se resolverá una vez sea entregado el atestado policial acordado en providencia de 19 de mayo de 2021, procede prorrogar por un máximo de seis meses el plazo de instrucción de la presente causa, que, en consecuencia, terminará el próximo día 09/09/2022".*

De modo que en la consideración del Ilmo. Sr. Magistrado Juez instructor originario, el plazo anual de instrucción se inició con fecha 9 de marzo de 2021, fecha de pronunciamiento del Auto al que nos referimos *"in extenso"* en el precedente apartado **(v)**. **b.-** La comparecencia de las personas a quien, en la expresada providencia de 28 de abril de 2023, se les atribuyó *"ex novo"*, la calidad de investigados, se produjo con posterioridad al dictado de la expresada providencia. **c.-** Respecto situación planteada en esta alzada desde la perspectiva estrictamente procesal, nos remitimos a las precisiones que verificamos con detalle, en el Antecedente de Hecho Primero de la presente resolución.

TERCERO .- Consecuencias derivadas en el caso Verificadas las precisiones y concreciones que preceden y por lo que respecta al primero de los autos que consideramos es decir el dictado con fecha 11 de diciembre pasado, en el que se dispuso: *"...ESTIMAR el recurso de reforma contra el Auto de fecha 24 de agosto de 2023, dejando el mismo sin efecto."*; tanto en la fundamentación mismo, como en los respectivos recursos de apelación y sus correspondientes impugnaciones, se parte de la consideración de que la propia progresión de la causa e incluso la sostenibilidad del marco procesal propio de la instrucción, está vinculada a la temporaneidad de la *"primera"* prórroga - la acordada mediante Auto datado el 18 de febrero de 2022-, pues rebasado el inicial plazo anual y acordada la prolongación una vez transcurrido este, esta circunstancia aboca de modo inexorable a la cancelación de la causa penal.

Desde otra perspectiva, con alguna matización poco relevante como hemos podido constatar, esta es la consideración que definitiva inspira el pronunciamiento de Auto dictado en igual fecha de 11 de diciembre pasado en el que se dispuso:

"...Se acuerda declarar la falta de validez de las diligencias acordadas después del 21 de enero de 2022, dejándolas sin efecto.

Se resuelve el fin de la instrucción en los términos que se indicarán en resolución aparte."

Como anteriormente hemos señalado, en una visión en conjunto de los dos expresados Autos, valorando las concretas circunstancias del caso que minuciosamente detallamos en el precedente fundamento, la exclusiva razón que determina la declaración del fin de la instrucción y por ende la declaración de conclusión del sumario, radica en la terminación del plazo de investigación, sin haberse acordado temporáneamente las prórrogas, correspondientes.

Ciertamente, a pesar de los minuciosos y esforzados argumentos impugnatorios aducidos por el Ministerio público y las respectivas acusaciones populares, la primera prórroga mediante Auto datado el 18 de febrero de 2022, era de carácter extemporáneo, pues se acordó finalizado el plazo anual iniciado el 21 de enero de 2021 –véase el -apartado **(iii)** del Fundamento precedente -.

Ciertamente, las únicas diligencias de investigación, acordadas con posterioridad a tal fecha, fueron las dispuestas en la providencia de 28 de abril de 2023 -apartado (xviii) del Fundamento precedente- y entre ellas las declaraciones en calidad de investigados del querrellado y de las otras personas reseñadas en la expresada resolución. Por ello, habida cuenta de la insusceptibilidad de estimación de los argumentos en que se fundan los recursos de apelación frente a los autos impugnados, centrados en diversa consideración sobre la determinación del “dies a quo”, para el inicio de cómputo anual, no merecen favorable acogida y conducen a la desestimación de los recursos examinados.

Sin perjuicio de lo cual, como hemos argumentado precedentemente, cabe apreciar que nuclear diligencia de averiguación, acordada en tiempo oportuno se concretó en el informe encomendado en calidad de funcionaria de Policía judicial a la inspectora de la Brigada Provincial de Policía Judicial del Cuerpo Nacional de Policía con número profesional 132.329 -apartado (xi) del Fundamento precedente-, conforme a lo acordado en providencia datada el 19 de mayo de 2021.

Obviamente esta fundamental diligencia de averiguación, minuciosamente dispuesta y eficientemente controlada en cuanto su puesta en práctica por el Ilmo. Sr. Magistrado Juez instructor originario, fue acordada temporáneamente dentro de inicial plazo de instrucción.

Exclusión hecha de las diligencias acordadas en la providencia de 28 de abril de 2023 ninguna otra se practicó en las cuatro sucesivas prórrogas.

Sobre el alcance, contenido, asidua intervención de la representación procesal del Sr. Arsenio y de él mismo en persona en algún de sus fases, también del Ministerio Fiscal y de la acusación popular entonces personada, nos remitimos a cuanto detallamos en el precedente Fundamento.

Y específicamente, nos referimos al contenido del informe presentado y particularmente a sus conclusiones, con el detalle que expresamos en el apartado (xvi) del Fundamento precedente.

Siendo de destacar, en relación con el Sr. Arsenio, que mediante Providencia de 18 de marzo de 2021-DE 46-, se le tuvo por personado en la posición jurídico procesal de “investigado”, ejerciendo eficazmente su derecho a la defensa y a la efectiva contradicción, proponiendo medios de contraste en relación con las diligencias de averiguación temporáneamente acordadas, y habiéndose solicitado como hemos expresado con detalle en el precedente Fundamento -apartado (xv)- el sobreseimiento de las actuaciones con base a una amplia argumentación, alguno de cuyos extremos incluso fueron puestos manifiesto a la funcionaria policial con posterioridad a la emisión y entrega del informe de referencia -véase el apartado (xvii) del Fundamento precedente- Será en la fase de ratificación o de confirmación del Auto conclusión del sumario sin procesamiento ante el Tribunal de enjuiciamiento -artículos 627 y siguientes LECrim- donde las partes acusadoras podrá hacer valer los argumentos que a su parecer impidan la ratificación de la decisión de conclusión del sumario, específicamente en cuanto a la práctica de diligencias de investigación provistas de conexión funcional, con la fundamental diligencia temporáneamente acordada dentro del inicial plazo de instrucción.

CUARTO.- Por los argumentos expuestos, los recursos de apelación que hemos examinado , han de ser desestimados, declarando de oficio las costas procesales causadas en su tramitación Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación

PARTE DISPOSITIVA

La Sala acuerda **DESESTIMAR** los recursos de apelación interpuestos por, (i) El **Ministerio Fiscal** (ii) La acusación popular ejercitada por el **Partido Político, Unión Del Pueblo Navarro**, procesalmente representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Jaime Ubillos Minondo.

(iii) La acusación popular ejercitada por el **Partido Político, Partido Popular**, procesalmente representada por el Procurador de los Tribunales Sr. Javier Araiz Rodríguez, Frente (a) al Auto de 11 de diciembre pasado, en el que se acordó:

“...ESTIMAR el recurso de reforma contra el Auto de fecha 24 de agosto de 2023, dejando el mismo sin efecto.”

(b) al Auto de 11 de diciembre pasado, en el que se dispuso:

“...Se acuerda declarar la falta de validez de las diligencias acordadas después del 21 de enero de 2022, dejándolas sin efecto.

Se resuelve el fin de la instrucción en los términos que se indicarán en resolución aparte.”

Confirmando por las razones expuestas a lo largo de la presente resolución, los expresados Autos.

Declarando que oficio las costas procesales causadas en la tramitación del presente recurso subsidiario de apelación.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de su procedencia con testimonio de esta resolución.

Así por este nuestro Auto, que es firme, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela o la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda. Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a las leyes.